



UN CAMPAMENTO DE PROTESTA. Frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en pleno centro de Madrid, se plantó ayer un campamento de refugiados. Fue la forma elegida por 16 ONG para protestar por el acuerdo de la UE con Turquía, una iniciativa que se celebró en 52 ciudades. / SAMUEL SÁNCHEZ

El Parlamento fija a Rajoy las líneas rojas sobre refugiados

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

Mariano Rajoy será hoy el primer jefe de Gobierno español que acuda a una cumbre europea con un mandato del Parlamento. Pese a las fuertes tensiones que dominan la actual situación política, todos los grupos parlamentarios consensuaron ayer una

declaración institucional en la Comisión Mixta Congreso-Senado que rechaza las expulsiones masivas de los refugiados llegados a Grecia, exige la tramitación individualizada de todas las solicitudes de asilo y pide garantías de respeto a los derechos humanos de los que sean devueltos a Turquía.

La crisis de los refugiados obró ayer el milagro de poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios. No había otro remedio, ya que el reglamento no permitía someter la propuesta a votación y solo podía salir adelante por unanimidad, como así ocurrió.

El Gobierno era consciente de que, al estar en funciones, carece de legitimidad para firmar el acuerdo entre la UE y Turquía para el retorno de los refugiados, por lo que buscaba la "aquiescencia" verbal de los grupos. Estos exigían, sin embargo, que se fijaran por escrito las líneas rojas que Rajoy no podrá sobrepasar.

Los últimos retoques al texto se dieron minutos antes de que se iniciara la comparecencia del secretario de Estado para la UE, Fer-

nando Eguidazu, en la misma sala del Congreso donde compareció. "No diréis que esto no es transparencia", bromeaba un diputado.

El acuerdo se logró porque el Gobierno hizo suyas las principales críticas que las organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron al preacuerdo que los mandatarios europeos alcanzaron el pasado día 7 en Bruselas con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu. O, al menos, a la interpretación que se hizo del mismo, dada su ambigüedad.

Así, el primero de los 11 puntos de la declaración parlamentaria expresa su rechazo "a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca, expresa o indirectamente, la posibilidad de

proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la UE".

Además, considera "imprescindible" garantizar que nadie sea expulsado hasta "la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado"; y que el acuerdo con Ankara "contenga garantías de cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto de los derechos humanos", de forma que los expulsados a Turquía no puedan ser devueltos a su país y reciban protección "equivalente" a la prevista en la Convención de Ginebra. Con esta fórmula se trata de sortear el que Turquía, que no ha suscrito dicho acuerdo, solo reconozca como refugiados a ciudadanos europeos, pero no a sirios o afganos.

Jefes de Estado y Gobierno

Las líneas rojas fijadas por el Parlamento español ya han sido asumidas por el Consejo Europeo, que se ha comprometido a introducir las en el texto que será sometido a los jefes de Estado y Gobierno. Le obliga a ello la legalidad europea e internacional.

La declaración del Parlamento exige, igualmente, "reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino" de los 3.000 millones de euros, ampliables a 6.000, que la UE ha prometido para atender a los refugiados en Turquía; aplicar "de manera solidaria" el acuerdo de reubicación de 160.000 refugiados, del que hasta ahora solo se han beneficiado 937 (18 a España); establecer vías seguras de llegada de los refugiados, para que no tengan que arriesgar su vida poniéndose en manos de las mafias; o promover una política común de asilo.

El texto final es el resultado de una ardua negociación que inició el PSOE con el envío a los demás grupos de un borrador de resolución el pasado lunes, que fue contestado por el Gobierno el martes por la noche.

Del borrador inicial han desaparecido las críticas al anticipo de la exención de visados para los turcos y la apertura de nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión de Ankara a la UE. Aunque el Gobierno también considera un error mezclar ambos temas con la crisis de refugiados, es consciente de que "algo hay que ofrecerle a Turquía".

Colau se ofrece a acoger a 100 personas

Ada Colau enviará hoy a Mariano Rajoy una carta en la que expondrá su proyecto de acoger en Barcelona a 100 refugiados de guerra que están ahora en Grecia. "Estamos aquí para ayudar", dijo la alcaldesa de Barcelona tras reunirse con el regidor de Atenas en la capital catalana. Tras recordar que el Estado se comprometió a reubicar a 16.000 personas y solo han llegado 18, Colau confió en que el Gobierno autorice la operación.